

**S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 44**  
**O R D I N A R I A**  
**MARTES 22 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cuarenta minutos del martes veintidós de abril de dos mil catorce, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán.

El señor Ministro Presidente Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

**I. APROBACIÓN DE ACTA**

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública ordinaria número cuarenta y tres, celebrada el lunes veintiuno de abril de dos mil catorce.

Por unanimidad de once votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

**II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS**

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el martes veintidós de abril de dos mil catorce:

**I. 203/2013**

Recurso de queja 203/2013, interpuesto por \*\*\*\*\* y otro, en contra del acuerdo de veinte de mayo de dos mil trece, por el que el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo indirecto 535/2013 de su índice. En el proyecto formulado por el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz se propuso: *“PRIMERO. Es fundado el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se revoca el acuerdo de veinte de mayo de dos mil trece, emitido por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, en el juicio de amparo indirecto 535/2013. TERCERO. Devuélvanse los autos del juicio de amparo indirecto número 535/2013, al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, para que lleve a cabo los actos precisados en el último apartado de la presente resolución.”*.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz realizó la presentación de los temas procesales del proyecto. Indicó que el tema toral del proyecto es establecer la oportunidad para promover la demanda de amparo indirecto contra actos dictados dentro de un procedimiento penal que afecta la libertad personal.

Refirió que el amparo indirecto de mérito se promovió en contra de los autos de formal prisión dictados por un juez penal del Estado de Coahuila, quien determinó la probable responsabilidad del delito de fraude equiparado, dictados el siete y doce de noviembre de dos mil doce, es decir, anteriores a la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo,

presentándose la demanda de amparo el trece de mayo de dos mil trece, bajo la vigencia de la nueva ley.

Señaló que el juez de distrito desechó de plano la demanda de amparo al considerarla extemporánea al plazo de quince días establecido en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, actualizándose la causa de improcedencia por consentimiento del acto reclamado, en términos del diverso artículo 61, fracción XIV, de dicha ley.

Indicó que la Primera Sala ejerció su facultad de atracción a solicitud del tribunal colegiado al que le fue turnado el recurso de queja interpuesto en contra de los autos de desechamiento relativos a la demanda de amparo, porque se cuestionaba la constitucionalidad de los artículos 17 y transitorios primero, segundo y quinto de la Ley de Amparo vigente, al considerarlos contrarios al derecho humano de irretroactividad de la ley, reconocido en el artículo 14 constitucional.

Precisó que los cuestionamientos que se busca dilucidar son, en primer lugar, cuál es la norma que rige la oportunidad para promover los juicios de amparo indirectos a partir del tres de abril de dos mil trece, contra actos que afecten la libertad personal del quejoso dictados dentro de un procedimiento penal, con independencia del momento en que éste se haya emitido; y, en segundo lugar, si el plazo previsto en la disposición legal aplicable es acorde o no con los parámetros de regularidad constitucional vigente.

Propuso someter a consideración del Tribunal Pleno los apartados procesales del proyecto.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la propuesta del proyecto contenida en los apartados I, II, III, IV y V relativos, respectivamente, a los antecedentes, al trámite, a la competencia, a la oportunidad, y a las consideraciones y fundamentos, la cual se aprobó en forma económica por unanimidad de once votos.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz realizó la presentación del apartado VI, relativo al estudio de fondo del proyecto, el cual está compuesto, a su vez, de cuatro partes.

En la primera parte se presenta un marco normativo de las Leyes de Amparo abrogada y vigente, en lo referente a la presentación de la demanda de amparo biinstancial contra actos que afecten la libertad personal dentro del procedimiento, con la finalidad de determinar cuál es la norma jurídica que, a partir del tres de abril de dos mil trece, rige el supuesto estudiado, con independencia del momento en que se haya emitido.

La propuesta sostiene que si bien los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo abrogada establecían que estos actos podían reclamarse en amparo en cualquier tiempo, lo cierto es que han dejado de tener vigencia a partir del artículo transitorio segundo de la Ley de Amparo vigente. Tampoco sería aplicable el artículo transitorio tercero de la Ley de Amparo vigente, el cual regula la aplicación de la Ley de

Amparo abrogada únicamente para aquellos juicios de amparo iniciados bajo su vigencia, pues el amparo vinculado con el recurso de queja que se analiza fue presentado dentro de la vigencia de la nueva Ley de Amparo, por lo que no es aplicable esta regla, aun cuando los autos de formal prisión se emitieron bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada. Por último, el artículo transitorio quinto, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente tampoco es aplicable al caso porque en la anterior Ley de Amparo no se preveía plazo de vencimiento para presentar una demanda de amparo contra actos dictados dentro de procedimiento que implicaran una afectación a la libertad personal y, por ende, debe entenderse el término genérico de quince días establecido en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, en virtud de que el supuesto no está comprendido en la fracción IV del citado dispositivo legal, el cual se refiere únicamente a aquellos actos de la misma naturaleza, pero dictados fuera de procedimiento.

En la segunda parte se incorpora un marco teórico relativo a los principios constitucionales involucrados en la materia (pro persona, progresividad, de acceso real y efectivo a la justicia, y recurso eficaz y sencillo), así como la delimitación del objeto, fin y naturaleza del juicio de amparo, al igual que el alcance de la protección al derecho humano de la libertad personal.

En la tercera parte, con base en el marco jurídico descrito, se define la norma jurídica que rige la oportunidad

para la presentación de una demanda de amparo indirecto contra un acto dictado dentro de un procedimiento penal que afecta la libertad personal del quejoso, con independencia del momento en que se haya emitido, a saber, el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente y, por consecuencia, se analiza si el plazo de quince días establecido en dicho precepto es acorde o no con los parámetros de constitucionalidad vigentes.

En la cuarta parte, se concluye que el plazo al que se sujeta la presentación de la demanda, en el supuesto estudiado, viola el principio de progresividad y el derecho humano a contar con un acceso real y efectivo a la justicia, así como tener un recurso eficaz y sencillo, reconocidos en los artículos 1º, párrafo tercero, y 17, párrafo segundo, constitucionales, así como 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues en la anterior Ley de Amparo no se preveía un plazo para reclamar, en juicio de amparo, actos que afectaran la libertad personal, lo que podría realizarse en cualquier tiempo, sin distinción de que fueran emitidos o no dentro de procedimiento, por lo que se propone que dicha restricción temporal sea inobservada por las autoridades judiciales que ejerzan el control de constitucionalidad y, de no existir alguna otra causa legal, deberán admitir a trámite la demanda de amparo indirecto.

Además, estimó que si el plazo a que sujeta la actual Ley de Amparo la oportunidad para presentar una demanda de amparo para reclamar actos dictados dentro del

procedimiento que afecten la libertad personal es contrario a los parámetros constitucionales, se propone que, en un control difuso de constitucionalidad, se suprima del orden jurídico la porción normativa “fuera de procedimiento” de la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, a fin de garantizar que el amparo indirecto pueda ejercerse en cualquier tiempo.

En cuanto a los efectos de las anteriores determinaciones, señaló que debe revocarse el acuerdo de veinte de mayo de dos mil trece, emitido por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila en el juicio de amparo indirecto 535/2013, y devolver los autos al órgano colegiado de control constitucional para que, de no advertir alguna otra causa legal, admita a trámite la demanda de amparo indirecto presentada por los quejosos y continúe con el trámite del juicio.

La señora Ministra Luna Ramos se separó del apartado correspondiente al marco teórico porque se realiza un estudio abstracto.

Respecto del apartado del análisis de fondo en el cual se excluye al artículo transitorio quinto de la Ley de Amparo vigente, indicó estar de acuerdo con el proyecto en cuanto determina que el supuesto estudiado en el proyecto no encuadra en ninguno de los dos primeros párrafos de dicho artículo, pues en el primero refiere a los juicios agrarios que no tenían plazo para su interposición, y en el segundo se contemplaban los casos en los que sí existía plazo en la Ley

de Amparo anterior y que en la nueva Ley de Amparo se establece un plazo diferente. Consideró que al legislador se le olvidó regular el supuesto estudiado en materia penal en el artículo transitorio quinto, sin embargo, podría realizarse una interpretación conforme de su párrafo primero, por ser un supuesto similar al del amparo en materia agraria, pues anteriormente no había plazo determinado y en la Ley de Amparo vigente sí lo hay, para establecer que debe computarse el plazo nuevo de siete años a partir del día siguiente al en que entró en vigor la nueva Ley de Amparo, aplicando el mismo principio al supuesto en materia penal, lo que posteriormente debería analizarse si es o no constitucional.

Por otra parte, estimó que el artículo transitorio segundo de la Ley de Amparo vigente es inconstitucional, porque remite a que el plazo se compute al momento en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, pero no es el tema analizado en este momento.

El señor Ministro Aguilar Morales se mostró en contra del marco teórico del proyecto, pues implica la emisión de pronunciamientos generales y abstractos no indispensables para resolver la litis planteada, además de que puede comprometer el criterio del Tribunal Pleno para casos futuros.

En particular, se inconformó con la afirmación del proyecto consistente en que el principio pro persona obliga a



maximizar la interpretación conforme que más se acerque al texto constitucional.

Recordó que, al resolver la contradicción de tesis 293/2011, se sostuvo que los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales deberán interpretarse con el límite establecido por las restricciones expresas de la Constitución Federal, por lo que el principio pro persona no necesariamente maximiza la interpretación conforme.

Refirió que en la discusión de la acción de inconstitucionalidad 18/2010, el señor Ministro Cossío Díaz indicó que la interpretación conforme no constituye una herramienta hermenéutica que pueda usarse indiscriminadamente, consideración que a la vez se estudió en la acción de inconstitucionalidad 32/2012. Adicionalmente, colocaría a este Tribunal Constitucional en una situación subordinada a las decisiones legislativas, reduciendo la defensa de la Constitución a un remiendo de las faltas del legislador frente a una potencial vulneración de los derechos humanos.

En cuanto a la expresión de la señora Ministra Luna Ramos, señaló que no es que el legislador anterior no haya establecido un plazo, sino que lo determinó como un plazo indefinido, por lo que no coincidiría con la aplicación de los artículos transitorios de la Ley de Amparo vigente que indicó.

La señora Ministra Luna Ramos señaló que, conforme a la Real Academia Española de la Lengua, plazo significa un término o tiempo señalado para algo, lo que no ocurría en la Ley de Amparo anterior, pero fuera del aspecto gramatical, no se establecía un número determinado de días, por lo que se presenta el mismo supuesto para la materia agraria en el párrafo primero del artículo quinto transitorio de la Ley de Amparo vigente.

El señor Ministro Aguilar Morales estimó que se trata de una cuestión de metodología, pues las afirmaciones que se realizan en el marco jurídico podrían utilizarse en el estudio sobre la constitucionalidad de la norma, mas no adelantarlas con determinadas conclusiones.

El señor Ministro Pérez Dayán indicó que el planteamiento de la señora Ministra Luna Ramos es recogido en el proyecto de la contradicción de tesis 366/2013 de futura discusión, bajo la ponencia de la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas, en el cual se apunta que los casos, como el que se estudia, no están regulados por el artículo quinto transitorio de la Ley de Amparo vigente.

Mencionó que entre las dos leyes de amparo existe el común denominador de que no hay plazos tratándose de cualquier acto prohibido por la Constitución o cuando no ha sido notificado y, si en el momento en que entró en vigor la nueva Ley de Amparo, independientemente de su publicación en el Diario Oficial, el quejoso no fue notificado de un cambio en la situación del régimen para combatir el

acto, entonces el artículo transitorio quinto no es aplicable y, en esa medida, la demanda de amparo se puede promover en cualquier tiempo. Estimó que, si se interpretara que el tipo de actos analizados no están incluidos en dicho artículo quinto transitorio, la solución del caso no tendría dificultad.

Anunció que tendría algunas observaciones respecto del segundo apartado del proyecto y su marco jurídico constitucional y teórico, pero que las reservaría para una segunda intervención.

La señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas compartió el sentido del proyecto en cuanto a que sostiene que el párrafo segundo del artículo quinto transitorio de la Ley de Amparo vigente no rige en el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo en contra de autos de formal prisión dictados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo actual, atendiendo a la interpretación conforme con los principios de irretroactividad y pro persona.

Adelantó que comparte la propuesta del segundo apartado del estudio de fondo del proyecto, ya que se viola el derecho de acceso efectivo a la justicia y el principio de progresividad.

El señor Ministro ponente Cossío Díaz concordó con que los artículos transitorios de la Ley de Amparo vigente tienen una laguna técnica respecto al supuesto estudiado.

Puntualizó que no resultarían aplicables al caso los párrafos primero y segundo del artículo quinto transitorio y

que tampoco estaría de acuerdo con la interpretación de los plazos con término y sin término.

Respecto de la solución analógica a los asuntos agrarios con los penales, consideró más plausible la solución del proyecto porque reconoce la laguna, siendo la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente el único elemento que expresamente contempla actos privativos de la libertad y su plazo fijo para la promoción del amparo. Aclaró que las soluciones analógicas tienen límites, máxime cuando se trata de esas dos materias, sosteniendo el proyecto en esta parte.

En cuanto a lo expresado por el señor Ministro Aguilar Morales, diferenció la maximización del principio pro persona de la interpretación conforme como herramienta generada de antaño por los tribunales constitucionales para salvar la constitucionalidad de los preceptos estudiados, a fin de no anular una norma y generar un problema complejo en la materia, por lo que aclararía el proyecto en este sentido.

El señor Ministro Pardo Rebolledo se mostró de acuerdo con el primer apartado del estudio de fondo del proyecto, pues se trata de un tema conceptual, ya que la anterior Ley de Amparo establecía que, en el caso de actos privativos de la libertad dentro o fuera de procedimiento, se podía interponer el amparo en cualquier tiempo, lo cual era una disposición textual, mientras que el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente establece el término genérico de quince días, excepto por sus fracciones, incluyéndose en ellas a los

actos privativos de la libertad, pero únicamente fuera de procedimiento judicial, por lo que, en el caso, deberá regir dicho plazo genérico y excluirse, por ende, la aplicación del artículo quinto transitorio para este caso concreto.

Por lo que ve a la propuesta del señor Ministro Pérez Dayán y la expresión del señor Ministro Aguilar Morales, indicó que el juicio de amparo se promovió dentro de la vigencia de la nueva Ley de Amparo, por lo que no podrían aplicarse los plazos de la ley derogada.

Recordó que la iniciativa original de reformas a la Ley de Amparo proponía un plazo genérico de treinta días, pero que en el debate parlamentario se llegó a la conclusión de que no era conveniente cambiarlo por el de quince días, sin embargo, el segundo párrafo del artículo quinto transitorio estaba pensado bajo la lógica de este cambio de plazo genérico, sin que al final se modificara para hacerlo acorde con la decisión final del legislador.

Estimó que existen dos soluciones posibles: la planteada por la señora Ministra Luna Ramos y la del proyecto. El problema de la primera es la interpretación analógica entre materias y el de la segunda sería a partir de cuándo se computaría el plazo, sobre todo cuando el acto reclamó se suscitó con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, resultando absurdo el realizarlo a partir de su notificación, por lo que tendrían que empezar a computarse al momento de entrada en vigor de la nueva ley.

Concluyó que no es aplicable el artículo quinto transitorio, por lo que los plazos que establece la nueva ley deben empezar a computarse a partir de su entrada en vigor, en términos del diverso artículo segundo transitorio.

Por otro lado, anunció que se apartaría de la segunda parte del estudio de fondo del proyecto porque en el desarrollo de estos principios constitucionales, en específico el de pro persona, no se está tomando en cuenta la jurisprudencia obligatoria de este Tribunal Pleno, en el sentido de que cuando hay restricciones constitucionales éstas deben ser aplicables a cualquier norma, sea interna o internacional.

El señor Ministro Presidente Silva Meza decretó un receso a las trece horas y reanudó la sesión a las trece horas con treinta minutos.

El señor Ministro Aguilar Morales se adhirió a la argumentación y propuesta del señor Ministro Pardo Rebolledo.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se mostró convencido con la intervención del señor Ministro Pérez Dayán, en el sentido de no resultar aplicable el párrafo segundo del artículo quinto transitorio, pues en los casos en materia penal no debe existir plazo tratándose de actos que afecten la libertad de las personas acaecidos durante la vigencia de la ley anterior, aunque el amparo se promueva dentro de la vigencia de la ley actual, pues se violentaría el

principio de retroactividad al aplicarse el término genérico de quince días de la nueva Ley de Amparo, el cual consideró abiertamente inconstitucional, situación que explicaría con más detenimiento en la siguiente sesión. De no prosperar la propuesta del señor Ministro Pérez Dayán, anunció que estaría de acuerdo con el proyecto.

Coincidió con el marco teórico y dogmático de la propuesta de fondo, pues existen casos como este en el cual resulta trascendente para fijar los presupuestos sobre los cuales se resolverá el punto jurídico. Estimó que el proyecto confunde las tres connotaciones del concepto de interpretación conforme: la primera y más antigua, es entender que todo el orden jurídico se debe interpretar de acuerdo con los principios, derechos y normas de la Constitución; la segunda y clásica, es cuando se analiza la constitucionalidad de una norma de carácter general por parte de un tribunal constitucional, y una de las posibilidades interpretativas la hace acorde a la Constitución, prefiriéndose ésta; y la tercera, la cual se vincula al caso y al proyecto, deriva del segundo párrafo del artículo 1º constitucional, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Por ello concordó con el señor Ministro ponente Cossío Díaz en ajustar el proyecto en este sentido.

Finalmente, consideró no ser importante en este caso hacer una referencia a las restricciones constitucionales al ejercicio de derechos humanos establecidos en la Constitución, además de que el Tribunal Pleno no ha votado

que, cuando se esté ante una restricción constitucional, deje de aplicarse el principio pro persona, aclarando no ser su intención abrir un debate al respecto.

La señora Ministra Luna Ramos indicó que, en cuanto a la aplicación del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el proyecto va descartando posibilidades.

Señaló que, para el cambio de vigencia de una Ley de Amparo a otra, se requiere de una norma de tránsito para saber a partir de cuándo se llevaría el cómputo del plazo correspondiente, lo que el legislador plasmó en el artículo quinto transitorio de la nueva ley, olvidando el supuesto materia de estudio y, por ello, su propuesta de equiparlo con la materia agraria.

Adelantó que estaría asimismo a favor de la sugerencia del señor Ministro Pardo Rebolledo, siempre y cuando se completara esta parte del proyecto en donde se determine que no debe aplicarse la ley anterior y, entonces, precisar a partir de qué momento debe correr el plazo para contar el término de la nueva ley.

El señor Ministro Pérez Dayán consideró, partiendo de los principios de progresividad, no retroactividad, de certeza y de interpretación más favorable a la persona, que la interpretación del artículo quinto transitorio debe ser en el sentido de que, si anteriormente no existía un plazo para el caso analizado, siendo esto lo dispuesto legalmente cuando se enteraron los quejosos del dictado de los actos



reclamados, no deben ser aplicables los plazos de la nueva ley, por lo que la demanda de amparo podría promoverse en cualquier momento. Anunció que, con esta interpretación, esta Suprema Corte alcanzaría la obligación constitucional de dar un contenido protector más amplio a la norma, permitiendo que el plazo indefinido de presentación del amparo respecto de los actos surgidos al tenor de la ley anterior, conforme a los nuevos principios constitucionales que involucra el citado artículo transitorio, se observe en esta nueva ley de la misma forma.

El señor Ministro Presidente Silva Meza acordó postergar la discusión del presente asunto y que éste continúe en lista.

Acto continuo, levantó la sesión a las trece horas con cincuenta minutos, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria del día jueves veinticuatro de abril de dos mil catorce, a la hora de costumbre.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.